

NOTA INFORMATIVA

## Reforma al Reglamento General a la Ley de Minería (Decreto Ejecutivo No. 273)

El Ejecutivo expide el Decreto N° 273 que reforma el Reglamento General a la Ley de Minería: cambio sustancial en el cálculo de la base imponible de las regalías (Artículo 82) y el ajuste soberano; se incorporan fórmulas, umbrales y obligaciones nuevas para control de la actividad para la ARCOM, SRI y concesionarios mineros, así como para gobiernos locales para la distribución de ingresos.

## Puntos clave del Decreto Ejecutivo No. 273

- **Regalías: nueva base imponible:** Para oro y plata se aplica Ingreso Bruto sin deducciones; para otros minerales metálicos se restringen deducciones según el régimen (pequeña, mediana o gran minería), con impacto económico inmediato.
- **Fórmulas técnicas y mayor control:** Se introducen fórmulas progresivas de regalías (3%–8%) con actualización semestral y se refuerza la fiscalización mediante ARCOM, SRI y UAFE.
- **Nuevas obligaciones y contratos vigentes:** Se exige autoabastecimiento energético y, aunque no hay adecuación automática de contratos, ciertas disposiciones pueden incidir en su ejecución futura.





## ¿Qué cambia en el RGLM?

El Decreto Ejecutivo No. 273, dictado por el Ejecutivo en la última jornada de 2025, modifica de forma íntegra el Reglamento General a la Ley de Minería y pone el foco en una reestructuración del régimen económico y de control de la actividad minera. Entre los cambios más relevantes se encuentra la sustitución del artículo 82, que pasa a definir de manera expresa y operativa la base imponible para el cálculo de las regalías, el ajuste soberano, incorporando además nuevas fórmulas técnicas y reglas de actualización semestral. También trata temas de control, transparencia, sujetos de derecho minero, distribución de ingresos con gobiernos locales, con una transitoria para contratos vigentes. A continuación los cambios más relevantes:

### **Artículo 82 RGLM: Cálculo de la base imponible de las regalías.**

El nuevo artículo 82 reemplaza criterios previos por reglas escritas sobre la base imponible de las regalías; y redefine de manera expresa el cálculo de la base imponible de las regalías mineras. Este cambio tiene un impacto económico directo sobre los concesionarios y elimina criterios interpretativos que se venían aplicando en la práctica administrativa y contractual.

### **Para oro y plata, la base imponible será el Ingreso Bruto de las ventas del mineral principal y secundario; no se permiten deducciones de gastos.**

En el caso de los proyectos que explotan “oro” y “plata”, la reforma al Reglamento establece explícitamente que la base imponible será el Ingreso Bruto derivado de la venta del mineral principal y de los minerales secundarios vinculados, sin admitir deducción alguna por costos de beneficio, refinación, transporte u otros rubros, como se pactaba anteriormente. Esta regla incrementa de forma inmediata la base gravable aplicable a esos proyectos y exige ajustes contractuales y financieros.

### **Para los demás minerales metálicos se diferencia por régimen:**

- Pequeña y mediana minería: la base imponible se configura como Ingreso Neto Efectivo, entendiendo por tal el Ingreso Bruto menos los gastos acreditados de beneficio, refinación y transporte.
- Gran minería: la determinación del Ingreso Neto Efectivo únicamente admite la deducción de gastos de refinación y transporte, quedando excluidos otros costos operativos habituales.

Adicionalmente, el Reglamento establece la obligación de declarar y pagar con periodicidad semestral, y sanciona con rigor las omisiones o evasiones, pudiendo llevar incluso a la caducidad del título minero en casos graves de incumplimiento.

### **Incorporación de artículos 82.1, 82.2 y 82.3 — fórmulas y umbrales para cálculo de la regalía en mediana y gran minería (RMG).**

Se añaden artículos que contienen fórmulas específicas para el cálculo de la regalía en mediana y gran minería. La metodología contempla promedios históricos de precios y medidas de dispersión (desviación típica) sobre un horizonte de referencia (últimos 10 años), y establece tablas de umbrales progresivos que determinan el porcentaje aplicable dentro del marco legal (rango entre 3% y 8%).

Estas tablas y las fórmulas deberán ser actualizadas por la autoridad con periodicidad semestral, introduciendo un componente técnico y dinámico al régimen de regalías.



### **Mayor técnica y control administrativo: ARCOM, SRI y UAFE.**

El Decreto refuerza las capacidades de fiscalización al facultar a ARCOM (u órgano equivalente) y al SRI para interoperar y cruzar información (catastro, declaraciones tributarias, reportes semestrales y otros registros), con vistas a validar la base imponible y detectar inconsistencias.

Además, se exige el registro en la **UAFE** como requisito habilitante para la comercialización de minerales, fortaleciendo los controles sobre cadena de comercialización y prevención de ilícitos.

### **El Alcance frente a Contratos Vigentes:**

El Decreto Ejecutivo No. 273 no establece una obligación general de adecuación, renegociación o modificación automática de los contratos mineros vigentes. No obstante, salvo lo previsto expresamente en la Disposición Transitoria Quinta respecto del cálculo del “ajuste soberano” en contratos de explotación anteriores a su vigencia, la aplicación práctica de las nuevas disposiciones reglamentarias —incluidas las fórmulas de cálculo reformadas— podría incidir en la ejecución futura de determinados componentes económicos contractuales, cuyo alcance deberá evaluarse caso por caso en función de su implementación administrativa y criterios interpretativos que se adopten.

### **Obligación de autoabastecimiento energético.**

La reforma introduce una obligación adicional de carácter operativo y estructural para los concesionarios mineros. En efecto, el concesionario, según corresponda al régimen y fase del proyecto, deberá implementar un sistema de generación eléctrica propio con capacidad suficiente para abastecer la totalidad de su demanda energética, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, su reglamento y demás normativa vigente y aplicable.

Esta exigencia supone un impacto relevante en la planificación técnica y financiera de los proyectos mineros, en particular por su incidencia en inversiones de capital (CAPEX), plazos de desarrollo y esquemas de cumplimiento ambiental y energético. Asimismo, obliga a los operadores a alinear sus modelos de abastecimiento energético con el marco regulatorio del sector eléctrico, reduciendo la dependencia del sistema público y reforzando los controles sobre sostenibilidad y autosuficiencia operativa.

### **Nuevas reglas procesales y de fases mineras.**

Se precisan definiciones y procedimientos aplicables al concepto de proyecto minero y a las fases de la actividad (exploración inicial, avanzada y evaluación económica), incluyendo plazos máximos, mecanismos para declarar el inicio de cómputo, y requisitos técnicos para la transición a explotación. Se exigen informes técnicos conforme a estándares internacionales (por ejemplo QP/CRIRSCO) para actos precontractuales y autorizaciones de fase.

La incorporación de la definición de “proyecto minero” ayudará en los procesos negociación y de desarrollo de los mismos.

### **Distribución de utilidades y regalías (modificación del artículo 86 y añadidos).**

El Reglamento acomete ajustes en la distribución del ingreso minero: dispone reglas concretas sobre el destino de utilidades y regalías, con porcentajes y fórmulas de reparto a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para inversión social. Estas disposiciones incluyen reglas específicas para territorios sensibles, como la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y reordenan la forma en que parte de los recursos se canalizan hacia proyectos locales.



### **Sanciones e ilegalidad y acciones de protección**

En la teoría, esta reforma busca combatir la minería ilegal: el texto normativo amplía las facultades de inspección y sanción de la Agencia competente y prevé medidas como el decomiso y el remate del material incautado, que podrá destinarse a la Empresa Nacional Minera u otros destinos previstos por la normativa.

Adicionalmente, el Reglamento flexibiliza los requisitos procedimentales para la presentación de acciones de protección, facilitando el acceso a este mecanismo de protección frente a actuaciones administrativas que puedan vulnerar derechos de los titulares mineros, lo que refuerza el control jurisdiccional sobre la actuación de la autoridad.

### **Sobre la calificación de sujeto de derecho minero:**

Se suprime el inciso que condicionaba el ejercicio de la calidad de sujeto de derechos mineros a una “delegación” expresa del Estado, manteniéndose como requisito el cumplimiento de los procedimientos y autorizaciones previstos en la Ley de Minería y su Reglamento, entre ellas estar inscrito en SRI con un RUC para actividades mineras.

El cambio clarifica que la calidad de sujeto de derechos mineros se ejerce a partir del cumplimiento de los requisitos legales y del otorgamiento de los títulos habilitantes correspondientes.

### **Otras modificaciones relevantes.**

El Decreto también introduce cambios en requisitos de inscripción y documentación registral, exigencias de solvencia para licencias de comercialización, reglas sobre contratos (cesión, operación, subrogación en obligaciones ambientales), un régimen de extinción por inactividad (plazo previsto de 4 años) y disposiciones transitorias y vacatio para la implementación de las nuevas reglas.

Establece condiciones para la cesión y transferencia de derechos mineros, con la subrogación de obligaciones.

Asimismo, se contiene una derogatoria expresa de normas anteriores que resultaban incompatibles con el nuevo texto.

Finalmente, el presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

### **Área de Energía y Recursos Naturales de ECIJA GPA**

[info.ecuador@ecija.com](mailto:info.ecuador@ecija.com)

Telf: [+\(593-2\) 2986528](tel:+59322986528)

[www.ecija.com](http://www.ecija.com)

INFORMATIONAL NOTE

## Amendment to the General Regulations to the Mining Law (Executive Decree No. 273)

The Executive Branch has issued Executive Decree No. 273, amending the General Regulations to the Mining Law. The reform introduces a substantive change to the calculation of the royalty taxable base (Article 82) and the sovereign adjustment, incorporates new formulas and thresholds, and imposes additional control and compliance obligations on ARCOM, the Internal Revenue Service (SRI), and mining concessionaires, as well as on local governments in relation to revenue distribution.

## Key Takeaways of Executive Decree No. 273

- **Royalties – new taxable base:** For gold and silver, royalties are calculated on Gross Revenue with no deductions; for other metallic minerals, allowable deductions are restricted depending on the applicable regime (small-scale, medium-scale, or large-scale mining), with immediate economic impact.
- **Technical formulas and enhanced oversight:** Progressive royalty formulas (3%–8%) are introduced, subject to semiannual updates, and supervisory powers are strengthened through enhanced coordination among ARCOM, the SRI, and the UAFE.
- **New obligations and existing contracts:** Mining concessionaires are required to implement self-supply power generation systems. While no automatic amendment of existing contracts is mandated, certain provisions may affect their future performance.





## What Changes under the General Regulations to the Mining Law (RGLM)?

Executive Decree No. 273, issued by the Executive Branch on the final day of 2025, comprehensively amends the General Regulations to the Mining Law, with a focus on restructuring the economic and oversight framework governing mining activities. Among the most significant changes is the replacement of Article 82, which now expressly and operationally defines the taxable base for the calculation of royalties and the sovereign adjustment, while also introducing new technical formulas and semiannual update rules. The reform also addresses matters of control and transparency, the qualification of mining rights holders, revenue sharing with local governments, and includes a transitional regime applicable to existing contracts. The most relevant changes are outlined below:

### Article 82 of the RGLM: Calculation of the Taxable Base for Royalties

The new Article 82 replaces prior criteria with express written rules governing the taxable base for royalties and expressly redefines the method for calculating mining royalties. This change has a direct economic impact on concessionaires and eliminates interpretative criteria that had been applied in administrative and contractual practice.

#### Gold and silver: taxable base based on Gross Revenue; no deductions permitted

For projects extracting gold and silver, the amended Regulations expressly establish that the taxable base is the Gross Revenue derived from the sale of the primary mineral and associated by-products, with no deductions allowed for beneficiation, refining, transportation, or other costs, as had previously been contractually agreed in some cases. This rule immediately increases the applicable taxable base for such projects and requires contractual and financial adjustments.

Other metallic minerals: differentiated by regime

- Small-scale and medium-scale mining: the taxable base is defined as Net Effective Revenue, understood as Gross Revenue less duly substantiated beneficiation, refining, and transportation costs.
- Large-scale mining: Net Effective Revenue may only deduct refining and transportation costs, excluding other customary operating expenses.

In addition, the Regulations establish a semiannual obligation to declare and pay royalties and impose stringent sanctions for omissions or evasion, which in serious cases may lead to the forfeiture (caducidad) of the mining title.

#### Incorporation of Articles 82.1, 82.2, and 82.3 — formulas and thresholds for royalty calculation in medium- and large-scale mining (MLM)

New provisions are introduced setting out specific formulas for calculating royalties applicable to medium- and large-scale mining. The methodology relies on historical price averages and dispersion measures (standard deviation) over a reference period of the last ten years, and establishes progressive threshold tables that determine the applicable percentage within the statutory range (3% to 8%).

These tables and formulas must be updated by the authority on a semiannual basis, introducing a technical and dynamic component to the royalty regime.

#### Enhanced technical framework and administrative oversight: ARCOM, SRI, and UAFE

The Decree strengthens supervisory and enforcement powers by authorizing ARCOM (or its equivalent authority) and the Internal Revenue Service (SRI) to interoperate and cross-check information (including the mining cadastre, tax filings, semiannual reports, and other records) to validate the taxable base and detect inconsistencies.



In addition, registration with the UAFE is required as a prerequisite for mineral commercialization, reinforcing controls over the commercialization chain and the prevention of illicit activities.

### **Scope with respect to Existing Contracts**

Executive Decree No. 273 does not establish a general obligation to adapt, renegotiate, or automatically amend existing mining contracts. Nevertheless, except as expressly provided in the Fifth Transitional Provision regarding the calculation of the “sovereign adjustment” in exploitation contracts executed prior to its entry into force, the practical application of the new regulatory provisions—including the revised calculation formulas—may affect the future performance of certain economic components of existing contracts. The extent of such impact must be assessed on a case-by-case basis, depending on administrative implementation and the interpretative criteria adopted by the authorities.

### **Obligation of Energy Self-Supply**

The reform introduces an additional operational and structural obligation for mining concessionaires. Depending on the applicable regime and project phase, concessionaires must implement their own power generation systems with sufficient capacity to supply their entire energy demand, in accordance with the Organic Law on the Public Electric Power Service, its regulations, and other applicable laws.

This requirement has a significant impact on the technical and financial planning of mining projects, particularly due to its effect on capital expenditures (CAPEX), development timelines, and environmental and energy compliance schemes. It also requires operators to align their energy supply models with the electricity regulatory framework, reducing reliance on the public grid and strengthening sustainability and operational self-sufficiency controls.

### **New procedural rules and mining project phases**

The Regulations refine definitions and procedures applicable to the concept of a mining project and to the phases of mining activity (initial exploration, advanced exploration, and economic evaluation), including maximum timeframes, mechanisms for declaring the commencement of time periods, and technical requirements for transitioning to the exploitation phase. Technical reports prepared in accordance with international standards (e.g., QP/CRIRSCO or equivalent) are required for pre-contractual acts and phase authorizations.

The incorporation of a formal definition of “mining project” is expected to facilitate negotiation and project development processes.

### **Distribution of profits and royalties (amendment to Article 86 and additional provisions)**

The Regulations introduce adjustments to the distribution of mining revenues by establishing specific rules governing the allocation of profits and royalties, including percentages and distribution formulas in favor of Decentralized Autonomous Governments for social investment. These provisions include specific rules for sensitive areas, such as the Amazon Special Territorial District, and reorganize the manner in which a portion of revenues is channeled to local projects.

### **Sanctions, illegality, and constitutional protection actions**

In principle, the reform seeks to combat illegal mining by expanding the inspection and sanctioning powers of the competent authority and providing for measures such as seizure and auction of confiscated materials, which may be allocated to the National Mining Company or other destinations provided by law.



In addition, the Regulations relax certain procedural requirements for filing constitutional protection actions, facilitating access to this remedy against administrative actions that may infringe the rights of mining titleholders, thereby strengthening judicial oversight of administrative conduct.

### **On the qualification as a mining rights holder**

The provision conditioning the exercise of mining rights on an express “delegation” by the State is repealed. Compliance with the procedures and authorizations set forth in the Mining Law and its Regulations remains required, including registration with the SRI under a mining-related tax identification number (RUC).

This change clarifies that the status of mining rights holder arises from compliance with legal requirements and the granting of the corresponding enabling titles.

### **Other relevant amendments**

The Decree also introduces changes to registration and filing requirements, solvency requirements for commercialization licenses, rules governing contracts (assignment, operation, and subrogation of environmental obligations), a regime for termination due to inactivity (with a four-year statutory period), and transitional provisions and a vacatio legis for the implementation of the new rules. It establishes conditions for the assignment and transfer of mining rights, including the subrogation of obligations.

Finally, the Decree expressly repeals prior regulations that are incompatible with the new framework.

This Executive Decree shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.

### **ECIJA GPA – Energy and Natural Resources Practice Area**

[info.ecuador@ecija.com](mailto:info.ecuador@ecija.com)

Tel.: +(593-2) 2986528

[www.ecija.com](http://www.ecija.com)